

Sin Policía fuerte no hay Estado fuerte

“Porque, al final, la ecuación es simple: cuando la Policía es fuerte, la democracia tiene más posibilidades de sostenerse”



Por: Coronel (R) JIMMY BEDOYA-RAMÍREZ
Administrador policial, columnista y escritor

El narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión alimentan redes que disputan la autoridad del Estado en amplias zonas del país.

En los debates políticos recientes, la seguridad suele aparecer como una promesa de campaña o una preocupación coyuntural. Sin embargo, cuando se observa con detenimiento la realidad territorial de Colombia, se descubre algo más profundo: la seguridad no es simplemente una política pública entre muchas otras. Es la condición básica que permite que todas las demás existan. En un país donde organizaciones criminales disputan corredores estratégicos, controlan economías ilegales y amenazan la vida cotidiana de miles de ciudadanos, la fortaleza de la Policía Nacional dejó de ser un asunto corporativo. Es, ante todo, una condición para la gobernabilidad democrática.

La pregunta, entonces, no es menor: ¿qué tipo de relación tendrá el próximo gobierno con la Policía Nacional? No se trata de una discusión administrativa ni de un debate exclusivo sobre reformas institucionales. En realidad, se trata de definir si Colombia fortalecerá una de las instituciones centrales del Estado o si seguirá atrapada en discusiones que terminan debilitando su capacidad para enfrentar al crimen organizado.

Conviene partir de una premisa elemental: una Policía fuerte no es una Policía arbitraria. La fortaleza institucional no se mide por la ausencia de controles ni por la expansión indiscriminada del uso de la fuerza. Se mide por la calidad de su formación, la solidez de su liderazgo, la estabilidad de su carrera profesional, el respaldo jurídico a sus actuaciones legítimas y la capacidad tecnológica para cumplir su misión. Una Policía fuerte combina autoridad con legitimidad, capacidad operativa con control institucional y cercanía con la ciudadanía.

La evidencia comparada confirma esta idea. Los estudios sobre excelencia policial muestran que las instituciones más eficaces comparten rasgos comunes: profesionalización, inversión tecnológica, apoyo gubernamental sostenido y una relación de confianza con la comunidad. También demuestran que el desempeño policial no depende únicamente de la institución, sino del entorno político y social que la rodea. Cuando el Estado respalda a su Policía con claridad estratégica, recursos adecuados y reglas coherentes, las probabilidades de éxito aumentan.

Colombia enfrenta hoy un escenario particularmente complejo. Las organizaciones criminales han evolucionado desde estructuras violentas tradicionales hacia sistemas sofisticados de control territorial y económico. El narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión alimentan redes que disputan la autoridad del Estado en amplias zonas del país. En ese contexto, la función policial adquiere una dimensión estratégica: no solo reaccionar frente al delito, sino sostener la presencia efectiva del Estado en territorios donde su legitimidad está bajo presión permanente.

Por eso preocupa que el debate público sobre la Policía Nacional oscile entre dos extremos igualmente problemáticos. De un lado, quienes creen que fortalecer la institución significa otorgarle poderes sin control. Del otro, quienes suponen que debilitarla simbólicamente equivale a fortalecer la democracia. Ambos enfoques ignoran una realidad evidente: en ausencia de instituciones de seguridad sólidas, el vacío de autoridad no lo ocupa la ciudadanía organizada, sino el crimen organizado.

La historia reciente del país ofrece una lección clara. Durante las décadas más difíciles del conflicto interno, Colombia comprendió que la presencia efectiva del Estado, y en particular de la Fuerza Pública,

era indispensable para recuperar territorios capturados por actores ilegales. Esa experiencia demostró que el fortalecimiento institucional debía acompañarse de modernización, inteligencia, investigación criminal y mayor articulación con la justicia. La seguridad sostenible no se construye solo con operativos, sino con información, investigación y legitimidad.

Al mismo tiempo, existe otra lección que no debe olvidarse: la Policía Nacional debe permanecer como una institución del Estado y no como instrumento de proyectos políticos. Su legitimidad depende de ese carácter institucional. Una Policía politizada pierde rápidamente la confianza ciudadana, y sin confianza no hay cooperación social ni prevención efectiva del delito.

Aquí aparece uno de los desafíos más importantes para el próximo gobierno: fortalecer la institución sin convertirla en escenario de disputas ideológicas. Reformar cuando sea necesario, modernizar cuando sea urgente y respaldar cuando sea indispensable. No es una tarea sencilla, pero sí una responsabilidad ineludible.

Además, fortalecer la Policía Nacional implica reconocer que la seguridad no depende exclusivamente de ella. Un sistema judicial eficaz, políticas públicas coherentes y estrategias serias contra las economías ilegales son componentes esenciales de la ecuación. Cuando la Policía captura y la justicia no sanciona, la credibilidad institucional se erosiona. Cuando el Estado no logra afectar las rentas criminales que financian la violencia, los esfuerzos operativos terminan siendo insuficientes.

En última instancia, el verdadero debate sobre la Policía Nacional no debería centrarse solo en su estructura o en sus protocolos. Debería centrarse en una pregunta más profunda: ¿qué tipo de Estado quiere construir Colombia? Un Estado que renuncie a ejercer autoridad en parte de su territorio difícilmente podrá garantizar derechos, desarrollo o estabilidad democrática.

La seguridad no es un fin en sí mismo, pero sí el suelo sobre el cual se construyen los demás proyectos de país. Sin instituciones capaces de proteger la vida, garantizar la ley y sostener la presencia estatal en el territorio, cualquier agenda de desarrollo o transformación social se vuelve frágil.

Por eso conviene recordar una idea sencilla, pero decisiva: fortalecer la Policía Nacional no significa fortalecer una institución; significa fortalecer la capacidad del Estado para cumplir su función más básica: proteger a sus ciudadanos.

Colombia necesita una conversación más madura sobre su seguridad. Menos consignas y más pensamiento estratégico. Menos polarización y más responsabilidad institucional. El desafío para el próximo gobierno, y para todos los sectores de la sociedad, será encontrar el equilibrio entre autoridad y legitimidad, entre control institucional y capacidad operativa.

Porque, al final, la ecuación es simple: cuando la Policía es fuerte, la democracia tiene más posibilidades de sostenerse. Pero cuando la Policía es débil, el Estado también lo es, y en ese escenario, los únicos que se fortalecen son quienes viven de la ilegalidad.